



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I

**5275/2021 C., L. A. L. c/ EN-AFIP-LEY 27605 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO Juzg. n° 12**

Buenos Aires, 16 de marzo de 2023.-RR

**Y VISTOS; CONSIDERANDO:**

I. Que la jueza de primera instancia rechazó el planteo formulado por la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) relativamente a la improcedencia de la vía procesal elegida por el actor y distribuyó las costas en el orden causado (ver el pronunciamiento del 28 de noviembre de 2022).

Para decidir de ese modo, ofreció diversos fundamentos:

(i) Dentro de la acción declarativa de certeza prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación “se encuentra la acción declarativa de inconstitucionalidad -tal como la aquí planteada- que, genéricamente, es la que puede ser deducida por las partes interesadas alcanzadas por disposiciones legales, que se consideran agraviadas por ser dichas disposiciones contrarias a derechos, garantías, exenciones o privilegios acordados por la Constitución Nacional, por normas de jerarquía constitucional o por normas de jerarquía superior a las leyes implicadas, pero inferior a la Constitución”.

(ii) “[L]a acción declarativa de certeza debe responder a un ‘caso’, ya que dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa, sino que debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes -al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes del conflicto”.

(iii) “[L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que para que prospere la acción de certeza es necesario que medie: a) actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo y c) que aquella actividad tenga



concreción bastante (Fallos: 307:1379; 325:474; 326:4774; 328:502 y 3586; 334:236)”.

(iv) “[E]n la especie, la parte actora pretende que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la ley N° 27.605 que contempla el ‘Aporte Solidario y Extraordinario para Morigerar los efectos de la Pandemia’ -según considera- conculca los arts. 16, 17, 19 y concordantes de la Constitución Nacional”.

(v) “Con relación a si se verifica un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, es dable recordar que, en este tipo de procesos constitucionales, ese requisito se configura porque sobre lo que no se está seguro es si la norma en cuestión es o no acorde a la Constitución (Fallos: 310:606; 322:2598; 330:2739; 331:337, 400 y 718; entre otros)”.

(vi) “Ello es lo que sucede en el caso pues, a la actora se la obliga al pago del ‘Aporte Solidario y Extraordinario para Morigerar los efectos de la Pandemia’, y lo que ella pretende aventar es la incertidumbre sobre la constitucionalidad de las normas que fundan dicha obligación”.

**II.** Que la AFIP interpuso recurso de apelación y expresó agravios que fueron replicados por el actor (ver las presentaciones del 14 y 21 de septiembre de 2022, y del 2 de febrero de 2023, respectivamente).

Sostuvo las siguientes críticas:

(i) “[N]o existen dudas acerca de la existencia de una obligación de pago dispuesta por el Congreso de la Nación, así como tampoco respecto de su alcance ni modalidad, puesto que de la lectura del escrito de demanda surge con claridad que la actora SABE Y CONOCE perfectamente bien lo que debe abonar al Fisco Nacional”.

(ii) “[N]o se ha acreditado aún una conducta de la AFIP tendiente a la efectiva y concreta percepción de la obligación” y “ante las eventuales determinaciones y liquidaciones practicadas de oficio (...), **la responsable podrá manifestar su disconformidad, y el rechazo del**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I

**5275/2021 C., L. A. L. c/ EN-AFIP-LEY 27605 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO Juzg. n° 12**

**reclamo la autorizará a interponer los recursos previstos en el artículo 76 de la Ley 11.683”.**

(iii) No existe “una lesión o perjuicio actual y un interés jurídico suficiente” que sustente vía procesal escogida por el actor. “[N]o se habría iniciado procedimiento de determinación de oficio alguno (...), dejando en evidencia que el daño invocado por la contraria resulta hipotético y conjetural. Ello sin perjuicio de la apertura de la Órden de Intervención (...) por la cual recién se estarían llevando a cabo tareas de verificación, unificación de criterios y solicitud de información para esbozar una hipótesis de ajuste, de corresponder”.

(iv) “[D]ebido al carácter subsidiario que reviste la acción declarativa, las acciones y recursos regulados en las leyes Nros. 11.683 y 19.549 desplazan a la acción de certeza”. Si el actor considera que el pago del “aporte” creado por la ley 27.605 era ilegítimo, “debió presentar la Declaración Jurada correspondiente y abonar el mismo y, en su caso, promover la acción de repetición prevista en el art. 81 de la Ley 11.683”.

**III.** Que el fiscal general, en su dictamen (del 27 de febrero de 2023), opinó que el recurso de apelación de la AFIP debe ser rechazado.

En este sentido, señaló que las diversas salas de esta cámara “se han expedido recientemente en casos análogos al presente rechazando el planteo de improcedencia de la vía prevista en el artículo 322 del CPCCN, formulado por el Fisco Nacional”.

**IV.** Que es necesario señalar que, tanto en el escrito de demanda como en la contestación del traslado del planteo de improcedencia de la vía procesal formulado por la AFIP, el actor puso de resalto la concurrencia de las siguientes circunstancias:

(i) La existencia de un estado de incertidumbre y un perjuicio actual que reposa en el hecho de encontrarse alcanzado por la obligación de



pago del “aporte” creado por la ley 27.605 “al que atribuye lesión constitucional”. La reglamentación prevista en las resoluciones generales n°s 4930 y 4954/2021 “le imponen la exigencia de presentar la declaración jurada y oblar el gravamen (...) sumiéndolo a un caso concreto”.

(ii) “[N]o se promovió una acción simplemente consultiva sino que lo que se busca es precaver la inconstitucionalidad de un acto en ciernes traducido en la ley que se impugna y en el reclamo que hizo la Administración en el marco de la [Orden de Intervención] N° 1925986”.

(iii) La inexistencia de otras vías legales que puedan poner fin a la situación planteada, en tanto se plantea la inconstitucionalidad de una norma “supuesto que no puede darse en sede administrativa donde la Administración no está facultada y se encuentra vedada para tratar dicho planteo”.

(iv) En el caso, existe el “contexto normativo” al que ha referido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 341:101 “que lo coloca en la obligación de tributar una suma dineraria significativa, absorbiéndole una enorme fracción de la rentabilidad obtenida en el año 2020, consumiéndole sustancialmente su utilidad, provocándole una lesión patente a su capacidad contributiva y patrimonio”. De prosperar la demanda, se “conseguirá evitar tributar el aporte que se reputa inconstitucional, caso contrario deberá afrontarlo, verificándose de este modo un evidente caso concreto”.

V. Que la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la que fue examinada por esta sala en las causas n°s 3.966/2021 “*B., G. E. c/ EN - AFIP - Ley 27605 s/ proceso de conocimiento*”, 6396/2021 “*C., F. H. c/ EN-AFIP-DGI-Ley 27605 s/ proceso de conocimiento*” y 3.258/2021 “*S., P. D. c/ EN - M Economía - AFIP - Ley 27605 s/ proceso de conocimiento*”, pronunciamientos del 13 de diciembre de 2022, a los que cabe remitir por razones de brevedad, según los términos de los votos allí suscriptos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I

**5275/2021 C., L. A. L. c/ EN-AFIP-LEY 27605 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO Juzg. n° 12**

**VI.** Que, por consiguiente, debe rechazarse los agravios ofrecidos por la AFIP-DGI y confirmarse la decisión apelada.

Las costas de esta instancia son distribuidas en el orden causado, dado el criterio expuesto en las causas citadas en el condisiderando precedente (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En mérito de las razones expuestas, concordemente con el dictamen del fiscal general, el tribunal **RESUELVE:** **1.** Rechazar los agravios ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva y confirmar el pronunciamiento apelado. **2.** Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.

Regístrese, notifíquese a las partes y al fiscal general —vía correo electrónico institucional—, y remítase al Juzgado n° 12.

---

*Fecha de firma: 16/03/2023*

*Firmado por: LILIANA MARIA HEILAND, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: CLARA MARIA DO PICO, JUEZA DE CAMARA*

*Firmado por: RODOLFO FACIO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: HERNAN GERDING, SECRETARIO DE CAMARA*



#35450919#359951851#20230315132604012